

TEMAS ECONÓMICOS

Contingencia y estancamiento

Sin un escenario de crisis internacional, la caída de la inversión y el crecimiento del gasto público dan cuenta del error de diagnóstico de la actual administración en el tema económico. Esto arriesga posicionarla como la de peor desempeño en este ámbito en décadas.

En materia económica, el tercer año de la administración Boric ha defraudado. Las expectativas eran altas, sobre todo luego de un 2023 marcado por la mediocridad: sin crisis internacional de por medio, Chile el año pasado solo evitó una recesión gracias a los ajustes estadísticos de las cuentas nacionales que realiza regularmente el Banco Central —la variación del PIB fue de 0,2%—, no a los esfuerzos del Ejecutivo por acelerar el crecimiento. Tal magra base de comparación debería ahora facilitar un mayor dinamismo, pero los resultados han dado cuenta tanto de las dificultades estructurales que enfrenta nuestra economía como de un gobierno cuyos déficits de gestión las acrecientan.

En perspectiva, según los resultados que reporta el Central, Chile no ha logrado resolver los problemas que tienen a la inversión deprimida. En seis de los últimos siete trimestres, la formación bruta de capital ha mostrado una variación en doce meses negativa. La excepción fue el 3,8% del primer trimestre (Q1) de este año, seguida por un derrumbe de -8,7%. En cuanto a la formación bruta de capital fijo, esta experimentó un derrumbe en las dos mediciones disponibles pa-

ra 2024: -6,1% en Q1 y -4,1% en Q2. En su componente de “maquinaria y equipo” los porcentajes fueron -14,1% y -9,1%, respectivamente. Esto, acompañado de un deterioro del mercado laboral, ilustrado por la creciente informalidad. La situación ha sido descrita por distintos técnicos como una “emergencia laboral”.

Las causas tras esta situación incluyen la ausencia de reformas procrecimiento de la actual y anteriores administraciones; la incertidumbre generada por una crisis institucional en donde la violencia fue normalizada por parte de la izquierda y que tuvo al país al borde de un inédito experimento constitucional; la expansión del crimen organizado, que ha logrado avanzar por la inoperancia del Estado, y un gobierno que desconfía ideológicamente de la iniciativa privada y reacciona a las críticas culpando al que lo antecedió.

Ineludibles son también los efectos de una excesiva burocracia (permisología), potenciada por equivocados criterios por parte de los funcionarios en distintos niveles, como queda graficado al conocerse cada tanto de proyectos productivos paralizados. El último ejemplo ocurrió esta semana,

cuando, luego de una larga espera, Colbún decidió suspender el proyecto Central de Bombeo Paposo, que implicaba inversiones por US\$ 1.400 millones, en Taltal. La iniciativa buscaba construir una planta de almacenamiento de energía renovable, área en que se supone Chile goza de importantes ventajas comparativas. Según la empresa, la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta de no acoger en su totalidad un recurso de reposición por una supuesta “falta de información relevante y/o esencial” determinó la medida. La firma sostuvo que la resolución de la autoridad fue “poco coherente y contiene errores formales evidentes”.

En un país donde la inversión sigue disminuyendo, cualquier falta de criterio o de rigurosidad por parte del Estado, a cualquier nivel, es inexcusable. Y las lecciones que el mercado extrae de este episodio son muy desfavorables. La salida del funcionario responsable es una reacción tardía. Si el Gobierno asignara la mitad del tiempo y esfuerzo que dedica a tramitar reformas tributarias a promover la inversión, este caso no hubiese terminado con una pérdida económica tan importante para el norte de Chile.

Cuentas fiscales

Así, a pesar de los intentos por modificar un relato económico dañino, en los hechos, el Gobierno no ha logrado convencer de ese giro a los inversionistas. Desde un punto de vista macroeconómico, ello ha sido compensado por un fuerte crecimiento del aparato público. En el mercado laboral, esto se ha traducido en un gradual cambio en la composición del empleo, posicionando al Estado como un empleador al que no le hace mella el menor crecimiento de la economía.

La discusión de una nueva Ley de Presupuesto permitirá visualizar tal dinámica. Con proyecciones de crecimiento tendencial en torno al 1,8%,

Chile debe avanzar con fuerza en un ajuste de sus niveles de gasto público que dé cuenta de la compleja situación de estancamiento. Pero ello es inconsistente con algunas de las decisiones de la autoridad fiscal. Desde luego, la intención de Hacienda de destinar parte importante de lo que se supone recaudará la recién aprobada Ley de Cumplimiento Tributario al próximo presupuesto (cerca de US\$ 1.200 millones) parece obviar las críticas respecto al real impacto recaudador de la reforma (el FMI, en su momento, estimó que recaudaría un tercio de lo proyectado por el Gobierno). Difícil de entender es también que, frente a la posibilidad de

que la administración del Presidente Boric sea la de menor crecimiento en décadas, Hacienda insista en un proyecto tributario que afecte el impuesto a la renta o uno previsional que golpee el mercado de capitales.

Por cierto, también hay una responsabilidad de la oposición, algunas veces funcional al desarrollo de una agenda que, de no mediar cambios dramáticos, dejará nuestras arcas fiscales en una desmejorada posición para la siguiente administración. Sin modificar este rumbo, el ministro Marcel arriesga pasar a la historia como el último en haber llegado a Teatinos 120 encontrando holguras fiscales.